

El TSJ marca la política



INFOBAE

El pasado 12 de junio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), los mismos tienen la tarea de convocar y organizar las elecciones parlamentarias previstas para este año, según lo establecido en la Constitución. Adicionalmente, desde el máximo tribunal del país se han dado zarpazos a dos partidos claves de la oposición, como son: Acción Democrática y Primero Justicia

En los últimos veinte años, el TSJ se ha atribuido la potestad de designar de forma parcial o completa el directorio del CNE: hasta la fecha van cinco ocasiones en que el Poder Judicial ha nombrado a los encargados de velar por la transparencia de los procesos electorales. El 2003, 2005, 2014, 2016 y 2019 son los momentos claves donde desde los tribunales se ha considerado la *omisión legislativa*, para atribuirse una potestad que recae en los diputados de la Asamblea Nacional.

Esta compuerta se abrió cuando los partidos de oposición que integran la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) con el Gobierno, introdujeron en el máximo tribunal un escrito donde solicitaban la *omisión legislativa*, afirmando que desde el Parlamento se había dado un retraso inexcusable para la designación de un nuevo CNE. Los voceros de Avanzada Progresista, Cambiemos, Copei, Esperan-

za para el Cambio, Soluciones para Venezuela y el Movimiento al Socialismo (MAS), se abrogaron el sentir ciudadano que pedía celeridad a un proceso que era obstaculizado por la propia oposición del G4.

Desde la Asamblea Nacional y el Gobierno interino que encabeza Juan Guaidó hubo un rechazo a la medida, considerando a los voceros partidistas de la MDN como *colaboracionistas* del régimen de Nicolás Maduro. De la misma forma afirmaron que esa petición carecía de validez, ya que desde el Poder Legislativo se estaba trabajando por lograr un CNE imparcial, a través del Comité de postulaciones, aun cuando el mismo no se había reunido desde que comenzó la cuarentena a nivel nacional.

Luego de la entrega del escrito por parte de las organizaciones de la MDN en el TSJ, con los respectivos rumores que se generaron, se designó a la nueva directiva del CNE. La misma quedó integrada por Indira Alfonzo, como presidenta del órgano electoral; Rafael Simón Jiménez quedó en la vicepresidencia; Tania D'Amelio, Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez como rectores principales. También fueron designados como rectores suplentes: Abdón Hernández, Alex Díaz, Carlos Quintero, Jennycet Villalobos, Juan Carlos Delpino, Luis Fuenmayor Toro, Frank Pic Duran, Gloria Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Borrego.

Hay que destacar que la nueva presidenta del CNE, Indira Alfonzo, fue magistrada del TSJ y presidenta de la Sala Electoral, siendo responsable de la sentencia que anuló la elección de los diputados de Amazonas. También pasó por el máximo tribunal, la ahora rectora Gladys Gutiérrez, quien fue su presidenta entre los años 2013 y 2017. Rafael Simón Jiménez es conocido por su amplia trayectoria política y por haber sido al principio del gobierno de Hugo Chávez uno de sus simpatizantes, separándose posteriormente del *proceso revolucionario* para convertirse en un destacado opositor.

Con respecto a los otros dos nombres del nuevo directorio: Tania D'Amelio es la única que viene de la anterior gestión dentro del CNE, siendo rectora desde el 2009, antes se había desempeñado como diputada de la Asamblea Nacional y militante del PSUV; sobre José Luis Gutiérrez no hay mayor información más allá de que es abogado y hermano de Bernabé Gutiérrez, exgobernador de Amazonas y dirigente de Acción Democrática.

El nuevo CNE tiene la tarea de convocar las elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional dentro de seis meses, le corresponde organizar un proceso cuestionado por gran parte del mundo y la mayoría de la oposición. También debe definir el método de elección para los nuevos parlamentarios, ya que el TSJ dejó sin efecto los artículos de la Ley de Procesos Electorales que establecían los circuitos que se adjudicaban a los actuales diputados.

PARTIDISMO JUDICIALIZADO

En horas de la noche del lunes 15 de junio, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia donde dejaba sin efecto a la actual directiva de Acción Democrática y en su lugar, nombraba a Bernabé Gutiérrez



Henry Ramos Allup.

EL NACIONAL

como líder de una mesa directiva *ad hoc*. Una medida que arrebató los símbolos y colores de uno de los partidos tradicionales a Henry Ramos Allup, quien ha sido el secretario general de la tolda blanca los últimos veinte años.

Al día siguiente, la misma sala emitía otra sentencia similar, pero esta vez en contra de la directiva de Primero Justicia, de esta manera a Henrique Capriles y Julio Borges les arrebató el partido que han fundado y construido durante esta etapa histórica. El TSJ designó a José Brito, actual diputado de la Asamblea Nacional, como coordinador general de la organización. Brito había sido expulsado por la directiva de Primero Justicia a finales de 2019, al estar involucrado en la denominada *operación alacrán*.

También van por el camino de la judicialización los partidos Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo: los liderados por Leopoldo López esperan que desde el TSJ se defina si son considerados una *organización terrorista*, mientras que la gente de Manuel Rosales está a la espera de terminar como los *adecos* y *justicieros* ya que, al momento de escribir este resumen, Chaim Bucaram, integrante del parlamento, solicitaba la sustitución de la directiva del partido de la casita.

No es la primera vez que desde el TSJ deciden intervenir en las organizaciones políticas.

Esto ocurrió con el PPT y Podemos, que luego de haber estado en las filas de la oposición, volvieron al redil chavista por decisiones judiciales que dejaban sin efecto las decisiones contrarias al *proceso revolucionario*. El caso de Copei es el más emblemático, ya que desde el 2010 los socialcristianos se encuentran resolviendo sus diferencias por la vía judicial; el último acto ocurrió en diciembre de 2019 cuando una sentencia dejó sin efecto la directiva encabezada por Mercedes Malavé y en su lugar nombraron como presidente de la tolda verde a Miguel Salazar.

Las decisiones de este tipo han dejado casi disueltas a las organizaciones, como es el caso del PPT y Podemos, o fragmentadas en diferentes tendencias que no son capaces de reconciliar posturas, caso Copei, lo que debilita el partidismo en Venezuela, sistema fundamental para construir y fortalecer la democracia. Desde la oposición ha habido un rechazo contundente a esta práctica, dejando de manera pública su reconocimiento a los dirigentes que han sido víctima de la *acción judicial*.

Todo parece indicar que este tipo de decisiones abona el terreno para un gobierno que busca reconocimiento interno y externo, tratando de crear un ecosistema de partidos políticos que, aunque se identifiquen como de oposición, no le

son incómodos y puede seguir buscando la perpetuidad en el poder sin mayores resistencias.

FLEXIBILIZACIÓN Y AUMENTO DE CONTAGIOS

Desde hace más de tres meses se implementó en el país una cuarentena para evitar un aumento significativo de contagios por el COVID-19. El 1 de junio se inició lo que se consideró una *flexibilización* de la cuarentena: en principio serían cinco días de activar algunas áreas económicas y comerciales, para luego realizar diez días de *cuarentena radical*; posteriormente la media fue modificada a siete días de flexibilización por siete días de cuarentena.

Para algunos expertos la medida era improvisada y no tomaba en cuenta el avance del virus, ya que según las proyecciones la pandemia comenzaría a tener sus picos más altos a partir del mes de junio. Por otro lado, los gremios empresariales piden alguna medida que garantice el desarrollo económico sin perjudicar la salud de los ciudadanos.

Al realizar esta reseña, el pico diario de contagios en Venezuela, había superado los doscientos contagios. Desde el Gobierno se trata de disminuir la situación al tratar de separar los casos *comunitarios* de los

importados, haciendo la propaganda de que el aumento de la pandemia dentro del territorio se debe a las personas que están regresando al país.

El enfoque dado desde el sector oficial a los migrantes retornados, como responsables de los nuevos brotes de COVID-19, los posiciona como “los malos” en la crisis, generando rechazo en los lugares donde llegan, ya que son considerados como portadores de la enfermedad, aun cuando las pruebas descartan algún contagio. También ha sido evidente el trato hacia los venezolanos que están regresando al país; muchos de ellos son aislados en lugares donde las condiciones higiénicas y de alimentos son casi nulas, lo que obliga a algunos a escaparse para estar con sus seres queridos.

Julio Castro, asesor en materia de salud de Juan Guaidó, ha manifestado que estos aumentos que se ven al día de hoy, no se deben a la flexibilización de la cuarentena, ya que a su juicio ese impacto se verá en un par de semanas. Todo esto producto del retraso que se genera en los resultados de las pruebas, así como en el tiempo que toma el virus en manifestarse en una persona.

Ya Nicolás Maduro ha informado que, ante el aumento significativo de contagios, se

tomarán las *medidas extraordinarias* para evitar un mayor rebrote del COVID-19. También denunció que toda esta situación se debe a un *ataque biológico*, que viene desde Brasil y Colombia.

ACUERDO CON LA OPS

Lo que parecía imposible, se hizo una realidad el pasado 1 de junio, cuando el Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional firmaron un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para atender la pandemia. El documento fue suscrito por Carlos Alvarado, ministro de Salud, el asesor médico del Parlamento, Julio Castro y un representante de la OPS.

Más allá del reconocimiento que se dan las partes con este acuerdo, se benefician millones de venezolanos que en estos momentos son vulnerables a contagiarse de COVID-19. Las partes establecen líneas prioritarias para abordar la situación como: detección de casos, vigilancia epidemiológica y tratamiento oportuno a los contagiados.

También se habla del manejo de unos recursos que serán administrados directamente por la OPS, sin especificar el monto. De la misma forma, el organismo internacional dará apoyo y asesoría técnica a los trabajadores de la salud que se encuentran atendiendo a los infectados.

Algunas organizaciones y líderes sociales ven con buenos ojos este acercamiento y esperan más acuerdos que contribuyan al alivio del sufrimiento de la población.



ARIANA CUBILLOS/AP